**PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
43/2012.**

SERVIDOR PÚBLICO: *****.

México, Distrito Federal a treinta de junio de dos mil catorce.

VISTOS; para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **43/2012;** y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia. El veintidós de junio de dos mil doce, la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial dio cuenta al Contralor, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la copia de conocimiento del oficio DGPC-06-2012-2272 del diecinueve de junio de dos mil doce, recibido el veintiuno del mismo mes y año, signado por el Director General de Presupuesto y Contabilidad de este Alto Tribunal, donde se solicitó al entonces Director General de Recursos Humanos se le aplicara descuento vía nómina (entre otros servidores) al servidor público *********, de los viáticos no comprobados en el plazo establecido, en comisión *********, lo que motivó que se iniciara, de oficio, el veintisiete de junio de dos mil doce el cuaderno de investigación **C.I. 43/2012** (fojas 6 a 8 del expediente principal).

SEGUNDO. Procedimiento. Por acuerdo del catorce de marzo de dos mil catorce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa **43/2012**, en contra de *********, por estimar que existían elementos suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el punto Décimo Sexto del ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XII/2003 DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS PARA LAS COMISIONES ASIGNADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

En el mismo proveído se ordenó requerir al servidor público señalado, a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, rindiera el informe concerniente a los hechos que se le imputan y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto de veinticuatro de marzo dos mil catorce, el Contralor tuvo por presentado en tiempo y forma el informe de defensas a ********* y por admitidas y desahogadas las pruebas dada su propia y especial naturaleza (foja 201 a 202 del expediente principal); mediante proveído de tres de junio de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del citado ACUERDO

PLENARIO NÚMERO 9/2005. Asimismo, el cuatro de junio de dos mil catorce, el Contralor emitió el dictamen en el sentido de que existían elementos suficientes para tener demostrada la infracción administrativa atribuida a *****, por cuya razón propuso sancionarlo con **Apercibimiento Privado**.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario 9/2005, en tanto se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Marco normativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del citado Acuerdo Plenario 9/2005, en todas las cuestiones relativas al procedimiento será aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en lo que no se oponga a ésta la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida al servidor público. Del auto por el que se dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la infracción administrativa que se atribuye a ***** es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el punto Décimo Sexto del ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XII/2003.

Bajo ese orden de ideas, se tiene presente que el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé las causas de responsabilidad que pueden atribuirse a sus servidores públicos por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

(...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;”

(...)

Luego, la obligación de cumplir las leyes y la normativa que determina el manejo de recursos económicos públicos deriva del artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se transcribe en lo conducente:

“Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(...)

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos”

(...)

La disposición prevista en el artículo 8, fracción II de la citada Ley, contiene dos obligaciones específicas para los servidores públicos, que consisten en:

- a) Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y
- b) Cumplir con lo dispuesto en las normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

En la redacción utilizada por el legislador, entre ambas hipótesis, destaca el uso de la conjunción copulativa “y” que es definida en el Diccionario de la Lengua Española como “*unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo*”; en ese tenor, dicha conjunción denota que la obligación mencionada en segundo término se encuentra unida a la primera y, por tanto, también lo que hace a su incumplimiento.

No obstante, el vínculo establecido por el legislador mediante dicha conjunción, no significa que siempre deban cumplirse simultáneamente los dos deberes, pues si bien es cierto que ambos supuestos están encaminados a regular cuestiones relacionadas con los recursos económicos públicos, también lo es que una u otra obligación pueden cumplirse independientemente, atendiendo a las funciones específicas asignadas a cada servidor público, ya que sólo algunos tienen la encomienda de formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, mientras que a cualquiera de ellos, en algún momento, puede asignarse el manejo de recursos públicos, por lo que en todo caso están obligados a observar las leyes y normas que determinan su manejo y ejercicio.

En ese sentido, el desacato a cualquiera de las hipótesis previstas en la fracción que se comenta puede configurar una infracción administrativa, ya que la primera se aplica únicamente

a aquellos servidores públicos que desempeñen funciones relacionadas, directamente, con la elaboración y ejecución de planes, programas y presupuestos, de ahí que condicionar la obligación de acatar cualquier disposición o norma relacionada con el manejo de recursos públicos al incumplimiento de la primera hipótesis limitaría el alcance de la obligación que se tiene para los servidores públicos de la Federación de ejercer los recursos públicos que se les asignen con apego en la normativa que sea aplicable.

En el caso en estudio, debe atenderse a la segunda hipótesis de la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esto es, el incumplimiento de cualquier ley o norma relativa al manejo de recursos públicos.

Por tanto, debe determinarse cuál es la norma que regulaba la obligación relativa a la comprobación de viáticos en la época en que tuvo lugar la comisión encomendada a *****.

Al respecto, es preciso señalar que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por regla general, la ley aplicable es aquélla que ha sido emitida con anterioridad al hecho infractor.

Como ha quedado precisado en el antecedente del caso, la comisión que le fue encomendada tuvo lugar en la siguiente fecha:

Comisión	Fecha de la comisión
*****	18 de mayo de 2012

Así, por la fecha en que se desarrolló la comisión, resulta aplicable el Acuerdo General de Administración XII/2003, el cual estuvo vigente hasta el treinta de junio de dos mil doce. Sin embargo, como dicho instrumento normativo fue abrogado por el diverso Acuerdo General de Administración I/2012 que entró en vigor el primero de julio del año en cita, según su artículo transitorio segundo¹, resulta necesario realizar un análisis sobre las obligaciones en materia de comprobación de viáticos previstas en ambos ordenamientos, con la finalidad de constatar si las obligaciones relacionadas con la comprobación de viáticos siguen vigentes y, en su caso, evitar la aplicación retroactiva del Acuerdo I/2012 mencionado.

En ese orden de ideas, es menester precisar que el término abrogar significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de un ordenamiento jurídico. En el caso, la abrogación del Acuerdo General de Administración XII/2003 fue expresa, debido a que el artículo transitorio segundo del diverso Acuerdo I/2012, así lo declara.

Pese a que el Acuerdo General de Administración XII/2003 fue abrogado expresamente en el artículo transitorio segundo del Acuerdo I/2012, lo cierto es que el diverso artículo cuarto transitorio de este último establece una excepción a la abrogación a que se refiere el transitorio segundo, en el tenor siguiente:

“CUARTO. *Los lineamientos que se deriven del presente acuerdo, serán elaborados por las áreas competentes dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente*

---

¹ **“PRIMERO.** *Este Acuerdo General entrará en vigor el día primero de julio de dos mil doce.*
SEGUNDO. *Se abrogan los Acuerdos Generales de Administración 23/99, del primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el que se determinan los lineamientos para la inversión de los recursos presupuestales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 24/99, del primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el que se determinan las políticas, normas y lineamientos para el ejercicio del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; XII/2003, del nueve de septiembre de dos mil tres, por el que se establece el sistema de contratación y pago de hospedaje, transporte y otorgamiento de viáticos para las comisiones asignadas a los servidores públicos de este Alto Tribunal; ...”*

acuerdo y sometidos a la aprobación del Comité de Gobierno por conducto de la Oficialía Mayor.

En tanto estos lineamientos sean emitidos, seguirán rigiéndose, en lo que no se oponga el presente Acuerdo, la normatividad vigente.

Anualmente, la Oficialía Mayor con apoyo en las Unidades Responsables respectivas, revisará el contenido de los lineamientos a que se refiere este artículo transitorio y de ser el caso propondrá al Comité de Gobierno las modificaciones correspondientes”.

Previamente a desentrañar el contenido y alcance del dispositivo acabado de transcribir, cabe enfatizar que los artículos transitorios forman parte del nuevo Acuerdo, de ahí que su observancia sea obligatoria, pues en los mismos se establecen, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir, o lo atinente a su aplicación, lo cual permite la etapa de transición entre la vigencia de un acuerdo y el que lo abroga.

El primer párrafo del artículo cuarto transitorio constriñe a que dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo General de Administración I/2012, se expidan los lineamientos que al efecto se prevén en ese ordenamiento.

La literalidad del segundo párrafo de esa norma en tránsito, permite advertir que la voluntad del órgano creador del Acuerdo I/2012, fue que hasta que entraran en vigor los lineamientos citados continuarían aplicándose todas aquellas reglas de la normativa vigente que no se opusieran a las establecidas en el nuevo ordenamiento.

Por lo anterior, a continuación se realiza un análisis comparativo de las diversas disposiciones que regulan la comprobación de viáticos en los Acuerdos Generales de Administración XII/2003 y I/2012, como se ilustra en la siguiente tabla:

COMPROBACION DE VIATICOS	
ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XII/2003	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2012
“DÉCIMO SEXTO.- Al término de su comisión, las personas comisionadas de los grupos 2, 3 y 4, deberán rendir un “Informe de Viáticos” en el formato que indique la Oficina de Viáticos, el cual deberá contener un breve resumen a cerca de la calidad de los servicios recibidos e incluir la siguiente leyenda: “Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos. Asimismo manifiesto tener conocimiento de lo dispuesto en el Acuerdo General de Administración XII/2003, del nueve de septiembre de dos mil tres, por el que se establece el Sistema de Contratación y Pago de Hospedaje, Transporte y el otorgamiento de Viáticos para las comisiones asignadas a los servidores públicos de este Alto Tribunal y de las sanciones que se aplicarán en caso de que los datos referidos no sean verídicos”. Además, deberá indicarse la fecha de la elaboración y contener la firma autógrafa de la persona comisionada. La comprobación de gastos deberá realizarse a más tardar a los quince días hábiles siguientes a la realización de la comisión encomendada.	“Artículo 130. Los viáticos deberán ser comprobados ante la Tesorería mediante documentos expedidos por terceros que reúnan los requisitos fiscales, y en los plazos correspondientes, conforme se establezca en los lineamientos. Los comisionados serán responsables de recabar la factura que ampare el gasto del hospedaje para su debida comprobación. En aquellos casos en que por la naturaleza de los servicios no haya sido posible recabar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, los comisionados podrán no comprobar hasta un 30% del total de viáticos recibidos en cada ocasión. El responsable de la comprobación del viático será el servidor público de la Suprema Corte al que se le haya otorgado el recurso para la comisión. En todo caso, será responsabilidad de los Coordinadores o Enlaces Administrativos de cada Unidad Responsable, tramitar y dar seguimiento a la comprobación de los viáticos”.

DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS	
COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2012
En sesión de primero de febrero de dos mil ocho, precisó que en relación con la devolución de viáticos no utilizados en una comisión, debían depositarse en la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además especificó que la comprobación del uso de los viáticos también implicaba adjuntar el original del documento expedido por la institución bancaria como constancia del depósito de los recursos no empleados.	“Artículo 132. El monto de viáticos no comprobados en términos del artículo 130 de este Acuerdo General, deberá ser reintegrado a la Suprema Corte mediante su depósito en los plazos establecidos para tal efecto y, en caso de incumplimiento, por descuento vía nómina al servidor público responsable de su comprobación, informando a la Contraloría de la Suprema Corte. La comprobación de la transportación aérea reservada por la Tesorería será realizada por ésta, con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales vigentes. En los casos que se cancele o modifique (cambio de itinerario) una comisión para la cual se haya solicitado a la Tesorería la reservación de la transportación aérea, será responsabilidad del comisionado dar aviso oportuno a la Tesorería con la justificación correspondiente y la autorización de su superior jerárquico, para realizar el trámite de cancelación del mismo”.

La confronta entre el Acuerdo General de Administración XII/2003 y lo dispuesto en el diverso I/2012, permite señalar que en ambos se establece la obligación de los servidores públicos a quienes se le otorgan viáticos con motivo de una comisión, de comprobar el ejercicio de los recursos otorgados por ese concepto.

Así mismo, de la comparación entre lo dispuesto por el Comité de Gobierno y Administración en sesión de primero de febrero de dos mil ocho y el Acuerdo General de Administración I/2012, se colige que antes de la entrada en vigor de este último, ya existía la obligación de devolver los recursos no utilizados por el comisionado, la cual subsiste en este último Acuerdo.

Luego, en cuanto al término para realizar la comprobación de viáticos, en el Acuerdo XII/2003, se establecía un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se realizó la comisión, esto es, el servidor contaba con quince días para comprobar los gastos de la comisión y devolver el monto no utilizado.

Por su parte, el Acuerdo General de Administración I/2012, establece en su artículo 130 la existencia de un término para cumplir con esa obligación, pero no precisa cuántos días, sino que remite a los lineamientos correspondientes, de los cuales no se tiene conocimiento que hayan sido expedidos a la fecha.

Conforme a las razones que se han expuesto con anterioridad, resulta válido concluir que los citados Acuerdos, de manera alguna, se oponen entre sí, ya que en ambos se prevé que las acciones de comprobación y de devolución

deben realizarse dentro de un plazo, sólo que en el anterior ordenamiento sí se precisa que éste es de quince días y en el ahora vigente hace una remisión a los lineamientos correspondientes que no han sido emitidos, de ahí que en este aspecto, el último ordenamiento se complementa con el anterior y, en esa medida, en términos de lo que dispone el artículo cuarto transitorio, segundo párrafo del Acuerdo General de Administración I/2012, resulta procedente la aplicación de las disposiciones del Acuerdo General de Administración XII/2003, relativas a la obligación de comprobar el ejercicio de viáticos y devolver el monto de los recursos no utilizados en un plazo de quince días. Dicho en otras palabras, esas disposiciones, por excepción expresa del artículo cuarto transitorio en comento, no han dejado de tener vigencia, por lo que su incumplimiento puede ser reprochado mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Determinada que ha sido la norma que regula el ejercicio y comprobación de los viáticos otorgados a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reitera que el punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003 señala que es obligación de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la rendición de un informe de viáticos y la comprobación de los gastos efectuados a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que se concluya la comisión.

Lo anterior, al concatenarse con lo establecido en el punto segundo, fracciones XI y XII del Acuerdo General de Administración XII/2003², permite inferir que la comprobación

---

² SEGUNDO. Para efectos de este acuerdo se entenderá por:
(...)

de los viáticos implica no sólo la presentación de un informe de los recursos ejercidos en una comisión y de los documentos que acrediten los gastos efectuados, sino también la devolución del remanente, esto es, del dinero no erogado en dicha comisión.

En otras palabras, debido a que los viáticos son recursos públicos del Alto Tribunal entregados a un servidor público para cubrir los costes de alimentación, transportación local y cualquier gasto similar o conexo con éstos, derivados de una comisión, surgen para el comisionado dos obligaciones relativas al manejo de esos recursos. La primera, comprobar los gastos erogados y la segunda, regresar el remanente cuando exista, en el entendido de que ambas acciones deben llevarse a cabo en los términos del segundo párrafo del punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la comisión.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Comité de Gobierno y Administración, en sesión de primero de febrero de dos mil ocho, precisó que en relación con la devolución de viáticos no utilizados en una comisión, debían depositarse en la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, especificó que la comprobación del uso de los viáticos también implicaba adjuntar el original del documento expedido por la institución bancaria como constancia del depósito de los recursos no empleados.

XI. Comprobante: Documento que acredita los gastos realizados con motivo de la comisión, el cual deberá cumplir los requisitos fiscales señalados en la legislación respectiva. Los comprobantes no aceptados se devolverán al comisionado y en caso de no ser sustituidos, se aplicarán los gastos como no comprobados y se sumarán al sueldo del comisionado integrando su base gravable para efectos del impuesto sobre la renta.

XII. Informe de Viáticos: Documento que deberá suscribir la persona comisionada al término del viaje, en el que informará a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad acerca de los gastos realizados y la calidad de los servicios recibidos.

En consecuencia, se reitera, atendiendo al fin que tiene el Acuerdo General de Administración XII/2003 y, en específico, el punto décimo sexto, debe entenderse que la devolución del remanente es una acción vinculada a la comprobación del ejercicio de los recursos públicos que se otorgaron para el desempeño de una comisión oficial, por ello, se sigue el criterio de que la devolución debe realizarse dentro del plazo de quince días hábiles señalados para la comprobación; por ende, el desacato a la obligación de comprobar viáticos en los términos indicados en el acuerdo general referido, conlleva el incumplimiento de la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En ese contexto, de las copias certificadas de la solicitud de viáticos y de la relación de gastos devengados en la comisión *****, que obran a fojas 53 y 18 del expediente principal, respectivamente, se advierte que ***** fue comisionado a Toluca, Estado de México, el dieciocho de mayo de dos mil doce, para trasladar el gabinete número ochenta de panduit del Centro Archivístico Judicial (CAJ) al “site” del Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para desarrollar tal encomienda, se le otorgaron viáticos por un monto de \$1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional).

La entrega del dinero que por concepto de viáticos se asignó a ***** para ejecutar la comisión referida, se acredita con la copia certificada del comprobante de traspasos de nómina de dieciocho de mayo de dos mil doce, que remitió la Dirección General de la Tesorería mediante oficio OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3082/08/2012, el cual corrobora que el diecisiete anterior se abonaron \$1,300.00 (mil trescientos

pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta bancaria del referido servidor público, cantidad que según lo informó la titular de esa dirección general, corresponde a la comisión ***** (fojas 54 y 51 del expediente principal).

En ese orden de ideas, según lo informó el Director General de Presupuesto y Contabilidad en su oficio DGPC-06-2012-2272 (foja 1 del expediente principal), del que se tiene copia certificada, ***** no cumplió con el plazo establecido en el Acuerdo General de Administración XII/2003 para la comprobación de viáticos de la comisión *****, es decir, quince días hábiles posteriores al en que concluyó la comisión, por lo que solicitó el descuento vía nómina a la entonces Dirección General de Recursos Humanos.

Asimismo, la Directora General de la Tesorería a través del oficio OM/DGT/SGICF/DIE/2832/7/2012, informó que se revisaron los registros de los ingresos a la cuenta del Alto Tribunal y en el estado de movimientos de la “Conexión Empresarial Internet”, se reflejaba un depósito de veintiuno de junio de dos mil doce, por \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por “Transferencia BPI desde la cuenta *****”, misma que coincidía con las cuatro últimas cifras de la cuenta en la que se deposita a *****, como se aprecia de la impresión de movimientos (fojas 26 y 27 del expediente principal).

Por su parte, el entonces Director General de Recursos Humanos con el oficio DGRH/DRL/605/2012 (foja 32 del expediente principal), remitió el diverso DGRH-DN-07-513-2012 signado por la Directora de Nómina (foja 33 del expediente principal), en el que comunicó que a ***** no se le realizó descuento alguno, en razón de que efectuó un

depósito por la cantidad de \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100), con lo cual consideró reintegrados a la cuenta del Alto Tribunal, los viáticos no comprobados correspondientes a la comisión *****.

Los oficios DGRH/DRL/605/2012, OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3082/08/2012, OM/DGT/SGICF/DIE/2832/7/2012 y DGRH-DN-07-513-2012, así como las copias certificadas del oficio DGPC-06-2012-2272, del nombramiento, de la solicitud de viáticos y de la relación de gastos devengados de la comisión *****, constituyen documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades, conforme a los diversos 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por haber sido expedidos por funcionarios en ejercicio de las facultades que la norma les otorgaba.

La copia certificada del comprobante de traspasos de nómina realizada a la cuenta del servidor público (foja 54 del expediente principal), así como la impresión del estado de movimientos de la conexión empresarial Internet (fojas 27 a 29 del expediente principal), al concatenarse con los oficios OM/DGT/SGT/DIVT/3082/08/2012 y OM/DGT/SGICF/DIE/2832/7/2012 de la Dirección General de la Tesorería con los que fueron remitidas, además con los diversos DGRH/DRL/605/2012 y DGRH-DH-07-513-2012 del Director General de Recursos Humanos y de la Directora de Nómina, merecen eficacia demostrativa plena, de conformidad con el artículo 210-A del citado código adjetivo, ya que se trata

de impresiones generadas y resguardadas en un sistema que forma parte de un programa computarizado de la institución bancaria desde el que el Alto Tribunal realizó la transferencia de mérito y también, tuvo registro de la “transferencia BPI desde la cuenta *****”, siendo que esa información puede ser consultada ulteriormente sin modificación alguna, por lo que su contenido es digno de fiabilidad y consecuentemente, adquieren valor convictivo y demuestran que a ***** se le depositaron \$1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de viáticos para llevar a cabo la comisión *****, asimismo, que el veintiuno de junio de dos mil doce, dicho servidor público reintegró la cantidad de \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al remanente de dicha comisión.

En el presente caso, como se refirió, de las copias certificadas de la solicitud de viáticos y de la relación de gastos devengados en la comisión *****, que obran a fojas 53 y 18 del expediente principal, respectivamente, se advierte que ***** fue comisionado a Toluca, Estado de México, el dieciocho de mayo de dos mil doce, por lo que se arriba a la convicción de que estaba obligado a presentar la comprobación y el depósito del remanente correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes a que llevó a cabo dicha tarea, de ahí que ese plazo transcurrió del veintiuno de mayo al ocho de junio de dos mil doce, descontando los días veintiséis y veintisiete de mayo, dos y tres de junio de dos mil doce, por ser inhábiles al haber correspondido a sábados y domingos.

Por su parte, de acuerdo con lo informado por el Director General de Presupuesto y Contabilidad en su oficio DGPC-06-2012-2272, ***** no cumplió con el plazo establecido en el

Acuerdo General de Administración XII/2003 para efectos de la comprobación de la comisión *****.

En ese sentido, se debe precisar que de la copia certificada de la relación de gastos devengados en la comisión ***** que obra a foja 18 del expediente principal, se advierte que los documentos que comprobaban dicha comisión los presentó en el plazo establecido por la norma, ya que según el sello de recibido de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, la documentación comprobatoria fue entregada el uno de junio de dos mil doce; destacando que en esa relación de gastos devengados se precisa que el saldo a favor del Alto Tribunal es de \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional).

Ahora bien, no obstante que los documentos comprobatorios de la comisión ***** se entregaron en tiempo, el reintegro del remanente de dicha comisión que corresponde a la cantidad de \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), lo depositó fuera del plazo establecido por la norma, ya que como se adelantó, ***** realizó la transferencia de dicha cantidad a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de junio de dos mil doce (foja 27 del expediente principal), es decir, de manera extemporánea, no obstante que dicho servidor público tenía hasta el ocho de junio de ese año para realizar el reintegro del remanente de los viáticos de la referida comisión, de ahí que es dable concluir que su presentación fue extemporánea.

Por tanto, al no cumplir con una norma relativa al manejo de recursos económicos públicos, en concreto, el punto décimo sexto del Acuerdo General de Administración

XII/2003, mismo que continúa vigente conforme a lo expuesto anteriormente, respecto de la comprobación de los viáticos otorgados para desempeñar la comisión *****, es dable concluir que ***** se apartó, de la obligación contenida en el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y con ello se ubica en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En el informe de defensas que ***** que presento el veintiuno de marzo de dos mil catorce destaca que ingresó a laborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del primero de noviembre de dos mil uno, en la Dirección General de Informática y desde esa fecha hasta hoy ha llevado a cabo diversas actividades, en las que siempre ha tratado de mostrar una conducta impecable, acorde con los valores y principios que se le han inculcado y ha procurado que los recursos del erario sean empleados de manera eficiente, eficaz y transparente.

Por otra parte, ***** refiere que en el reporte de actividades que rindió el treinta de mayo de dos mil doce al Director General de Tecnologías de la Información (anexo 1), se advierte que no sólo realizó el traslado del gabinete que originalmente se le encomendó, sino otras actividades, tales como revisiones y pruebas en el centro de cómputo del Centro Archivístico Judicial, un levantamiento para verificar la posibilidad de reubicar un rack con equipo de comunicaciones en la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, además del traslado de equipo de comunicaciones fuera de operación.

Continúa alegando ***** que en el anexo 2, se detalló todo el equipo que trasladó al Centro Archivístico Judicial, con respecto del cual considera, que al ser maniobrado y trasladado por una sola persona se pone en riesgo su integridad física, en virtud de que se trata de estructuras pesadas, mismo que se incrementa cuando después del cansancio acumulado tiene que manejar un vehículo y refiere que si bien, esa situación no es justificante de los hechos materia de este procedimiento, solicita se valore como atenuante de los mismos.

En otro orden de ideas, ***** manifiesta que en fechas posteriores a la comisión *****, realizó diversas actividades encaminadas a mejorar el desempeño y funcionalidad de los sistemas instalados en el centro de cómputo del edificio sede del Alto Tribunal, las cuales le generaron una carga de trabajo alta, que le impidió realizar el trámite de la devolución de los recursos no devengados.

Luego, a fin de justificar su proceder, ***** sostiene que del pase de salida de veintiuno de mayo de dos mil trece (anexo 3), se advierte la lista del equipo que trasladó del edificio alterno al sede del Alto Tribunal y precisa, que si bien dicha situación no justifica la infracción que se le atribuye, solicita que se tome como atenuante con respecto a ello, dado que al querer atender cada solicitud de sus superiores, descuidó dar seguimiento al trámite de la comprobación de viáticos en la comisión *****, que hasta la fecha le afecta.

Por otro lado, ***** refiere que el procedimiento que llevó a cabo el Alto Tribunal en dos mil doce, relativo al ajuste de las fechas de pago de los salarios de los servidores públicos, repercutió en su obligación de comprobar los viáticos

de la comisión que le fue encomendada, ya que al vencimiento del plazo que tenía para ello, ya no contaba con efectivo para solventar el monto del reintegro y, si bien, reconoce que dicha situación no justifica la conducta que se le imputa, solicita se tome como atenuante, pues no cuenta con un puesto que sea mejor remunerado, que le permitiera contar con la solvencia económica deseada, por lo que para sostener su dicho, refiere que en el estado de movimientos de la “Conexión Empresarial Internet” (anexo 4), se aprecia la cantidad de dinero que tenía disponible en su cuenta al momento de pagar los recursos no devengados y no poseía más cuentas o actividades extras, que le generen recursos.

Finalmente, ***** concluye que si bien ninguno de los hechos referidos lo eximen de responsabilidad, ni justifican que por descuido u omisión generado por la carga de trabajo hubiese omitido reintegrar en tiempo los recursos no devengados en la comisión, también es cierto que jamás actuó de manera dolosa ni tuvo la intención de dañar el erario e insiste que en aquel momento no contaba con recursos económicos para hacer la devolución, aunado a que presume que no causó afectación contable o fiscal ni al Alto Tribunal ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, máxime que la omisión de reintegrar los \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) en tiempo, no resulta grave en virtud de que sólo se retrasó por nueve días hábiles, por lo que considera exagerada la determinación de iniciar este procedimiento disciplinario, incluso porque en ***** de servicio, ha dado más del cien por ciento en cada una de las actividades que ha desarrollado.

En primer lugar, debe precisarse que *****, reconoce que se le encomendó la comisión *****, que se

le otorgaron recursos para su desarrollo y además que omitió reintegrar en tiempo el importe de los recursos no devengados, que corresponde a \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por nueve días hábiles; manifestaciones que deben valorarse como una confesión expresa, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 93, 95, 96 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, la cual corrobora que a dicho servidor público se le otorgaron recursos económicos por concepto de viáticos y que erogó parte de los mismos.

Luego, en diversos párrafos, ***** se limita a afirmar, que debido a las altas cargas de trabajo que tuvo tanto en la época en que se le encomendó la comisión *****, como en días posteriores, estuvo impedido para cumplir con su obligación de comprobar en tiempo los viáticos que le fueron otorgados, en este caso, en la porción de reintegrar el importe de aquéllos no devengados, sin embargo, aun cuando de la copia simple del reporte de actividades que rindió al Director General de Tecnologías de la Información (foja 196 del expediente principal), se advierte un listado de diversas diligencias, de dicho documento se aprecia que el propio responsable señaló que correspondían al dieciocho de mayo de dos mil doce y, por lo que respecta a los pases de salida que adjuntó a su informe de defensas (fojas 198 y 199 del expediente principal), sólo se describen bienes informáticos; por tanto, en ese sentido, no es dable que con tales argumentos se justifique la conducta que se le reprocha, dado que tuvo quince días para cumplir con su comprobación de viáticos que como quedó señalado, transcurrieron del veintiuno de mayo al ocho de junio de dos mil doce.

Continúa alegando que posterior a la comisión siguió teniendo altas cargas de trabajo, que incluso ponían en riesgo su integridad física, pero omite acreditar dicha situación con algún medio de convicción, aunado a que dichas manifestaciones no pueden servir de base para excluirlo de responsabilidad administrativa, en atención a que, independientemente de la carga de trabajo que refiere, los servidores públicos, incluidos los que prestan sus servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deben dejar de cumplir con su obligación de rendir oportuna y verazmente su informe de comprobación de viáticos, por lo que resultan ineficaces sus alegaciones para los fines pretendidos, pues se insiste, aunque se aduzca la existencia de cargas de trabajo, el servidor público está constreñido a cumplir con sus obligaciones.

Por otro lado, lo alegado por ***** en el sentido de que al vencimiento del plazo que tenía para cumplir con su comprobación de viáticos ya no contaba con efectivo para devolver el monto del reintegro, además de no contar con un puesto que le permitiera contar con la solvencia económica deseada, no constituye una excluyente de la responsabilidad administrativa que se le atribuye, dado que como quedó acreditado con la copia certificada del comprobante de traspasos de nómina de dieciséis de mayo de dos mil once (foja 138 del expediente principal), se le depositaron \$3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales gastó \$1,808.90 (mil ochocientos ocho pesos 90/100 moneda nacional) y, le sobraron \$370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta relevante aclarar, que el remanente corresponde a recursos que el Alto Tribunal le abonó para desarrollar la encomienda, motivo por

el cual, el hecho de que considere que no tenga un empleo mejor remunerado resulta intrascendente, pues se insiste, en ningún momento debió disponer del remanente como si fuera de su peculio, sino de los recursos públicos que se le abonaron.

En otro orden, la afirmación en cuanto a que la falta que cometió no es grave, deviene inatendible al controvertir una cuestión ajena a las consideraciones en que se sustenta el acuerdo de inicio de procedimiento, en tanto que de la lectura íntegra del mismo puede advertirse que esta autoridad no realizó consideración alguna ni pronunciamiento respecto de que dicho servidor público hubiese incurrido en actos que pudieran ser considerados como infracciones graves, pues como se adujo, la infracción que se le imputó fue el haber incumplido su obligación de comprobar los viáticos que le fueron otorgados en la comisión *****, en cuanto a que omitió devolver aquéllos que no utilizó.

CUARTO. Sanción. A efecto de individualizar la sanción que le corresponde a *****, por no haber reintegrado los recursos no ejercidos de los viáticos que se le otorgaron con motivo del desempeño de una comisión oficial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135, fracción I, 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción I, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, se deben atender los siguientes aspectos:

I. Gravedad de la infracción. En términos de lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, antepenúltimo párrafo, de la

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la infracción cometida por ***** no está catalogada como grave, ni se considera así en el caso concreto.

II. Circunstancias socioeconómicas. No es necesario analizarlas dado que en este caso no se impondrá sanción pecuniaria, en tanto con la conducta infractora no ocasionó un perjuicio económico a este Alto Tribunal, debido a que se reintegraron, si bien extemporáneamente, los recursos económicos otorgados para la multicitada comisión; y, no se advierte que el servidor público hubiese obtenido un lucro o beneficio indebido.

III. Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De la solicitud de viáticos, del recibo de abono y del nombramiento vigente en el expediente personal, se advierte que el servidor público *****, en la época en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen tenía el encargo de *****, adscrito a la entonces Dirección General de Informática, ahora Dirección General de Tecnologías de la información (foja 68 del expediente principal), con antigüedad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que data del uno de noviembre de dos mil uno, por lo que tiene de más de doce años de ser servidor público.

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. El bien jurídico tutelado es la obligación de acatar las normas que regulan el ejercicio de recursos públicos como son los viáticos, encaminadas a observar de los principios constitucionales que rigen su administración, de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, deber que como

se demostró no fue acatado, ya que ***** omitió devolver el remanente de viáticos que es lo que se le reprocha en este procedimiento.

V. Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que a ***** se le haya impuesto previamente una sanción administrativa.

En mérito de las consideraciones que anteceden, atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan la obligación que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de reintegrar el remanente de los viáticos no ejercidos dentro de los quince días siguientes a la conclusión de la comisión, así como a la conducta procesal observada por ***** durante el desarrollo del procedimiento, esta Presidencia estima que en atención a lo dispuesto en el artículo 135, fracción I, 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo conducente, artículo 4, fracción III, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, en relación con el 45, fracción I, y 48, fracción I, del Acuerdo General Plenario 9/2005, se le debe imponer al infractor la sanción **Apercibimiento Privado**.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente de *****.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. *****, incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción de **Apercibimiento Privado.**

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos que procedan y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Contador Público Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 43/2012 instaurado en contra de ***** . Conste.

AFBR/JGCR/JHT.

“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.